

ORIGINARIO

Renault Argentina S.A. c/
Salta, Provincia de s/ acción
declarativa de certeza.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 11 de julio de 2024

Vistos los autos: "Renault Argentina S.A. c/ Salta, Provincia de s/ acción declarativa de certeza, de los que

Resulta:

I) A fs. 28/50 se presenta Renault Argentina S.A y promueve demanda en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la Provincia de Salta, a fin de que se haga cesar el estado de incertidumbre generado, según alega, por la pretensión del Estado provincial demandado de someter a la alícuota general en el impuesto a las actividades económicas a los ingresos obtenidos por la actora, derivados de la "fabricación de vehículos automotores" y "fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores". Refiere que se la excluye discriminatoriamente de la exención dispuesta en el artículo 174, inc. "w", del Código Fiscal provincial, por no desarrollar la accionante esas actividades en un establecimiento industrial ubicado en territorio salteño. Expone los motivos por los que, a su criterio, se encuentran cumplidos los requisitos de procedencia formal de la acción.

Dice que a partir del período fiscal 01/2016 comenzó a aplicar a las actividades antes referidas la exención prevista en el Código fiscal provincial, en vez de la alícuota del 3,6 % indicada en la ley local 6611, comunicando tal circunstancia al organismo fiscal. Ante ello, la Dirección General de Rentas de la provincia demandada le notificó un acto administrativo emitido el 22 de septiembre de 2016, por el cual se le reclamó el pago de \$ 1.482.992,19 por diferencias de alícuota por los períodos 01 a 08 de 2016.

Explica que Renault Argentina S.A. es una empresa que se dedica a la fabricación de automotores, así como de sus partes, piezas y accesorios para vehículos y sus motores. Añade

que cuenta con una planta industrial en la Provincia de Córdoba y que desarrolla su actividad en todo el territorio nacional, por lo que tributa el impuesto a las actividades económicas bajo el régimen general del Convenio Multilateral.

Asevera que la exclusión de la exención impositiva -por no contar con establecimiento industrial en la provincia- afecta a la cláusula comercial (art. 75, inc. 13), violenta las garantías de igualdad y razonabilidad (arts. 16 y 28), actuando como una aduana interior, desconociendo lo dispuesto en los arts. 8, 9, 10, 11, 16, 28, 31 y 75 -inc. 1 y 10-, todos de la Constitución Nacional.

Indica que la provincia demandada interfiere con el comercio interprovincial y se arroga facultades que no le son propias. Cita jurisprudencia del Tribunal en apoyo de su postura.

II) A fs. 58/68 la actora acompaña copia de la Resolución 200-17 de la Dirección General de Rentas provincial, por lo que a fs. 69 se tiene por ampliada la demanda.

III) A fs. 70/71 el Tribunal declaró su competencia originaria para entender en la presente causa. A su vez, hizo lugar a la medida cautelar solicitada en el escrito de inicio y a fs. 67/68, por lo que dispuso, en resumen, que el Estado provincial debía abstenerse de reclamar a la accionante las diferencias impositivas que se desprendían de la resolución 200-17 antes referida, así como de aplicar y ejecutar multas o trabar cualquier medida cautelar sobre el patrimonio de la sociedad; y que tributara idéntica alícuota a la prevista en la legislación local para los contribuyentes con establecimientos ubicados en territorio provincial; todo ello hasta tanto se dictara sentencia definitiva en estas actuaciones.



Renault Argentina S.A. c/
Salta, Provincia de s/ acción
declarativa de certeza.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

IV) A fs. 89/102 la Provincia de Salta contesta la demanda y solicita su rechazo.

Tras las negativas de rigor, señala que, en ejercicio de sus potestades tributarias, eximió del pago del Impuesto a las Actividades Económicas a las industrias que posean su planta radicada en la provincia, con la finalidad de promover el desarrollo de industrias en su territorio y de generar fuentes de trabajo genuino para sus habitantes, lo que se relaciona expresamente con la cláusula prevista en el art. 125 de la Constitución Nacional.

Asegura que la cláusula comercial no se encuentra vulnerada, que el mercado de fabricación de automotores en el país es de "tipo oligopólico" y que la Provincia de Salta -en donde no se producen automotores- no ha efectuado un trato discriminatorio ni existe una múltiple imposición. Agrega que cumple con la prohibición de establecer aduanas interiores, y que los principios de igualdad y razonabilidad tributaria también se encuentran cumplidos.

Expone los motivos por los que considera que están ausentes los presupuestos formales de la acción declarativa.

Finalmente, añade que la mecánica del impuesto en la provincia ha tenido en miras "salvaguardar de la doble imposición a los productos que ingresan a Salta".

V) Que a fs. 132/133 el Estado provincial demandado refiere que la normativa atacada -inc. w del art. 174 del Código Fiscal- ha sido derogada mediante el art. 6° de la ley local 8064, dictada el 7 de diciembre de 2017, por lo que considera que la cuestión objeto del juicio es abstracta.

VI) A fs. 142 obra el dictamen de la señora Procuradora Fiscal acerca de las cuestiones constitucionales

propuestas, que remite a lo dictaminado en su oportunidad en la causa CSJ 114/2014 (50-H)/CS1 "Harriet y Donnelly S.A. c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza". Por último, a fs. 143, se pasan los autos a sentencia.

Considerando:

1º) Que tal como lo ha decidido el Tribunal a fs. 70 /71, esta demanda corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional.

2º) Que la acción deducida constituye una vía idónea para motivar la intervención del Tribunal, pues no se trata de dar solución a una hipótesis abstracta sino que se propone precaver los efectos de la aplicación de una norma local, el artículo 174, inc. w, del Código Fiscal provincial (decreto ley 9/1975 y sus modificatorias), a la par de fijar relaciones legales que vinculan a las partes en el conflicto (Fallos: 311:421; 318:30; 323:1206; 327:1034, entre otros).

En el presente caso, se advierte que ha mediado una conducta estatal explícita de la demandada dirigida a la aplicación de la alícuota del impuesto a las actividades económicas que la aquí actora cuestiona (Fallos: 311:421 y 328:4198).

En efecto, la actividad desplegada por la autoridad provincial, de la que da cuenta la prueba documental agregada a la causa (véase la "corrida de vista" obrante a fs. 12/19 y la Resolución 200-17, anexada a fs. 58/66 de estos actuados y a fs. 307/315 del expediente administrativo 22-542019/2016, reservado en Secretaría), demuestra que la controversia es actual y concreta (Fallos: 310:606 y 311:421).



Renault Argentina S.A. c/
Salta, Provincia de s/ acción
declarativa de certeza.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

A esto no resulta un óbice lo argumentado por la demandada respecto al dictado de la ley local 8064, ya que no produce efecto retroactivo alguno en relación a la normativa fiscal antes referida, ni tiene incidencia respecto a la pretensión fiscal provincial puesta de manifiesto en la documental descripta en el párrafo precedente.

3°) Que en cuanto al fondo del asunto, la cuestión a resolver en el *sub lite* presenta sustancial analogía con la ya examinada y resuelta por el Tribunal en Fallos: 340:1480 y en la causa CSJ 114/2014(50-H)/CS1 "Harriet y Donnelly S.A. c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza", sentencia del 31 de octubre de 2017, a cuyos fundamentos y conclusión corresponde remitir en cuanto fueren aplicables al caso de autos, en razón de brevedad y con el propósito de evitar repeticiones innecesarias.

4°) Que, por lo tanto, la aplicación de la normativa provincial que se cuestiona, en el caso concreto, al denegar la exención pretendida por la accionante y, en consecuencia, gravar con la alícuota del 3,6 % las actividades industriales antes referidas, obstaculizaba el desenvolvimiento del comercio entre las provincias.

5°) Que en tales condiciones, a la luz de los preceptos constitucionales examinados en las causas citadas en el considerando 3°, y de los criterios fijados por esta Corte a su respecto, en el *sub examine* queda en evidencia la discriminación generada por la legislación provincial en función del lugar de radicación del establecimiento productivo del contribuyente, en tanto se lesionaba el principio de igualdad (Constitución Nacional, artículo 16), y se alteraba la corriente natural del comercio (Constitución Nacional, artículos 75, inciso 13, y 126), instaurando así una suerte de

"aduana interior" vedada por la Constitución Nacional (artículos 9° a 12), para perjudicar a los productos foráneos en beneficio de los manufacturados en su territorio, extremo que conduce a la declaración de invalidez de la pretensión fiscal de la demandada (Fallos: 340:1480).

Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal, se decide: Hacer lugar a la demanda entablada por Renault Argentina S.A. contra la Provincia de Salta. En consecuencia, declarar la inconstitucionalidad del requisito de poseer planta industrial en la Provincia de Salta, establecido en el artículo 174, inc. w, del Código Fiscal provincial (decreto ley 9/1975 y sus modificatorias), así como de la pretensión fiscal plasmada en la "corrida de vista" del 22 de septiembre de 2016 y en la resolución 200-17, ambas emitidas por la Dirección General de Rentas provincial en el marco del expediente administrativo 22-542019/2016, respecto a las actividades de "fabricación de vehículos automotores" y "fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores". Con costas a la vencida (artículo 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, comuníquese esta decisión a la Procuración General de la Nación y, oportunamente, archívese.



ORIGINARIO

Renault Argentina S.A. c/
Salta, Provincia de s/ acción
declarativa de certeza.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Parte actora: **Renault Argentina S.A.**, representada por el doctor **Ezequiel Cardozo Veneziano**, con el patrocinio letrado del doctor **Eduardo Marcelo Gil Roca**.

Parte demandada: **Provincia de Salta**, representada por los doctores **Edgardo César Martinelli y María Macarena Alurralde Urtubey**.